

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 13 º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-8387-2015  
CARATULADO : ELGUETA / FISCO DE CHILE

Santiago, treinta de Noviembre de dos mil dieciocho

**Vistos:**

A fojas 1, comparece doña Karla Andrea Rivillo Machuca, abogada, en representación de **Diego Ignacio Elgueta Valenzuela**, con domicilio en calle Virgilio Figueroa casa E, comuna de Las Condes, quien interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en sede extracontractual, en contra del **Fisco de Chile**, representado a su vez por el Abogado Procurador Fiscal, doña Irma Soto Rodríguez, o quien legalmente le subrogue, con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, de conformidad con los antecedentes de hecho y derecho que se reseñan en los párrafos siguientes.

Expone que su mandante es ex cadete de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado, posición que ocupó hasta el día 05 de marzo de 2012, bajo el N° de Empleado 125978-4, de dotación de la IV Bandada de Cadetes, fecha en que solicitó su baja voluntaria en virtud de las graves y reiteradas injusticias y abusos de autoridad cometidos por Oficiales de dicha Institución.

Agrega que mediante Orden del Día N° 45/2011 de 09 de diciembre de 2011, su representado fue sancionado, luego de ser acusado de cometer fraude en una prueba escrita, con 300 deméritos, sanción impuesta sin prueba alguna en su contra, y sin que éste haya realizado tal acción. Expone que ese día el Sr. Elgueta Valenzuela se encontraba junto a otros cadetes contestando una prueba escrita de Ingeniería del material T-35 Pillán, examen controlado por el Teniente Gabriel Jarpa, el que en forma inesperada interrumpió la prueba para consultar a cada uno de los cadetes si se encontraban copiando a lo que contestaron que no. Luego de ello,



señala que el Teniente hizo ingresar a los cadetes que ya habían terminado la prueba hasta la sala y se pidió a quienes la rendían que adoptaran la posición de espalda a la sala de clases, pidiendo a quienes ingresaron que escribieran en la pizarra los nombres de quienes habrían visto copiando, sin que su mandante pudiera ver lo que escribieron pues al volverse ya habían borrado lo escrito. Agrega que, luego de ello el Teniente Jarpa se dirigió nuevamente a su mandante y al cadete que se encontraba en el pupitre del lado para preguntarle si estaban copiando, a lo que respondieron negativamente, y después los lleva a la Comandancia de las Bandadas, en donde se efectúa una reunión con el CDB (A) Andrés Fuentealba y la Teniente (AD) María Admüssen, consultándoseles una vez más sobre el particular, respondiendo ambos que no estaban copiando, y pasados unos minutos se acerca a ellos el Teniente Ítalo Guzmán quien les señaló luego de comentarles lo que significaba en su nivel de deméritos la situación de que se les acusaba, les dijo apuntándolos que no pertenecían a su bandada y que no se molestaran en enviarle una carta al Director.

Señala que su representado se sintió profundamente ofendido y humillado por la acusación del Teniente Jarpa, la que considera constituye un abuso de autoridad, mala aplicación de medida disciplinaria, y en definitiva una falta gravísima a sus deberes al delegar su responsabilidad de vigilar y tomar el examen en los propios pares del Sr. Elgueta, quienes fueron los encargados de señalar si éste copiaba o no. En efecto, enfatiza que con el fin de inculpar a este último, el Teniente Jarpa tomó los apuntes de su compañero de banco y los puso sobre su pupitre.

Expone que la actitud del Teniente Ítalo Guzmán no se condice con la de un Oficial de la Fuerza Aérea, puesto que no tenía participación ni injerencia alguna en la situación, humillando a su representado sin siquiera escuchar su versión y conminándolo a no enviar carta alguna al Director.

Añade que con fecha 12 de diciembre de 2011 su mandante solicitó la reconsideración de la sanción impuesta arbitrariamente al Comandante Jorge Vargas Macher, quien le señaló que si bien con anterioridad a la ocurrencia del episodio había decidido reducir la cantidad de deméritos por una única vez, en atención a su fraude ello ya no materializaría. Asimismo,



que en atención a los antecedentes escritos y declaración de testigos, se pudo comprobar la ocurrencia del fraude, lo cual dejaba a su mandante con un total de 810 deméritos, y mantiene la sanción impuesta.

Agrega que el día 15 de diciembre del mismo año, su mandante presenta solicitud al Director de la Escuela de Aviación Coronel Cristian Pizarro Stieponovich, reiterándole los hechos de forma escrita y solicitando tomar medidas contra los Oficiales involucrados. El día 29 de diciembre el Coronel Pizarro determinó dejar sin efecto la sanción de 300 deméritos y resuelve conmutar el equivalente de 30 méritos, lo cual deja a su representado con 480 deméritos en su hoja de amonestaciones 2011, quedando en calidad de condicional hasta finalizar el primer semestre 2012.

Refiere que iniciado el año académico 2012, ya como su subalférez, su mandante notó desde el comienzo una especie de persecución de parte de los Oficiales que lo habían sancionado, clara manifestación de ello se produjo el día 16 de febrero de 2012, en circunstancias en que su mandante se encontraba con salida al hospital institucional y al regresa se entera que la escuela tenía salida general por orden del Director, por lo que pidió autorización al Oficial de servicio Teniente Castilla Rubio para asistir con tenida N° 2, siendo autorizado por éste, ya que no contaba con otra camisa limpia, y que pese a ello, de igual modo fue sancionado en la Orden del Día N° 05/2012 de la IV Bandada de Cadetes del día 22 de febrero de 2012, con 60 deméritos, por desobedecer abiertamente las disposiciones del Manual del Cadete, por no recogerse con la tenida estipulada. Agrega que según el actual manual en su Capítulo V, letra C N° 2, el uniforme de salida es tanto la Tenida N° 2 como la Tenida N° 2 (MC).

Señala que por lo anterior, y en vista a la grave depresión que sufre su representado producto de las injusticias y abusos de autoridad cometidos por los Oficiales que lo sancionaron, su mandante solicitó su baja voluntaria de la institución con fecha 5 de marzo de 2012.

Respecto al derecho, sostiene que la conducta desplegada por los oficiales configura la denominada “falta de servicio” de la Institución, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6, 7 y 38 inciso segundo de la



Constitución Política de la República, y artículo 4 de la Ley 18.575 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En este punto sostiene que la responsabilidad del ente público no precisa del elemento dolo o culpa, pues su procedencia encuentra sustento en el mal funcionamiento del ente público. Es así, como enfatiza que su representado se vio privado arbitrariamente de pertenecer a la institución por un acto negligente y falta de servicio, todo lo cual generó un enorme perjuicio tanto patrimonial como psicológico.

Agrega como normas fundantes de la responsabilidad de la fuerza área en el caso de marras, los artículos 330 del Código de Justicia Militar, norma que se aplica también a la fuerza área conforme el artículo 6 del mismo cuerpo legal, y artículo 255 del Código Penal y 42 de la Ley de Bases de la Administración del Estado.

En cuanto a los daños que reclama, estos los hace consistir en los siguientes: 1) Daño emergente el que corresponde a la evaluación de la imposibilidad de desempeñarse profesionalmente como funcionario de la Fuerza Área de Chile por la suma de \$ 100.000.000; 2) Lucro Cesante: la suma que dejó de percibir mensualmente por la suma de \$ 900.649 multiplicada hasta la fecha de presentación de esta demanda, que asciende a la suma de \$ 32.423.364; y, 3) Daño Moral: entendido como la lesión inmaterial o agravio, representado en el dolor, angustia, depresión, dolores de cabeza y falta de tranquilidad derivados del actual de la Institución, el que avalúa en la suma de \$ 100.000.000.-

Atendido lo expuesto, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por la Abogada Procurador Fiscal de Santiago, doña Irma Soto Rodríguez, o quien le subroga legalmente, y acogerla en todas sus partes, condenándolo a pagar en favor de su representado la suma de \$ 32.423.364 por lucro cesante y \$ 100.000.000 por daño moral, o la suma que el tribunal estime fijar de acuerdo al mérito del proceso, más los intereses y reajustes que se devenguen desde la fecha de presentación de la demanda, con costas.



A fojas 20, consta notificación personal de la demanda a doña Irma Soto Rodríguez en representación del Fisco de Chile.

A fojas 27, la parte demandante rectifica el petitorio de su demanda, señalando en ella que el monto que solicita como indemnización asciende a la suma de \$ 232.423.364.- según desglose siguiente: 1) \$ 32.423.364 por concepto de lucro cesante; 2) \$ 100.000.000 por daño emergente; y, 3) \$ 100.000.000 por concepto de daño moral.-

A fojas 40, el Fisco de Chile mediante Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, procede a contestar la demanda, solicitando su total rechazo, con costas, en atención a las alegaciones y defensas que se reseñan a continuación.

En primer término controvierte todos los hechos, salvo aquellos que en el desarrollo de su contestación fueren reconocidos.

Luego alega la inexistencia de responsabilidad objetiva de la administración del Estado, señalando que los artículos 6 y 7 de la Constitución establece un régimen de responsabilidad en que ésta nace cuando los órganos no someten su acción a la Constitución y las leyes o actúan fuera de su competencia, atribuyéndose autoridad o derechos que les han sido conferidos por el ordenamiento jurídico o contraviniendo las leyes. En tanto, enfatiza que el artículo 38 inciso segundo, solo tuvo como finalidad la creación de tribunales contenciosos administrativos, los que nunca fueron creados por ley, y por tanto dicha norma no es una norma sustantiva destinada a regular la responsabilidad del Estado. De igual modo, expone que el artículo 42 de la LBGAE que dispone el régimen de responsabilidad por falta de servicio no es aplicable a las fuerzas armadas. En consecuencia, sostiene que ante la falta de un estatuto especial, la responsabilidad civil por los daños se rige únicamente por las normas generales del Código Civil.

En cuanto a la legislación aplicable al personal del ejército de Chile y en particular a los alumnos de las escuelas matrices, cita en primer lugar los artículos 101, 102, 105 de la Constitución, Luego, el Título 11, Carrera Profesional, Párrafo 1º, Ingreso, de la Ley N° 18.948, “Orgánica



Constitucional de las Fuerzas Armadas”, el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, DFL N° 1, artículo 2 inciso 2° que hace aplicables a los alumnos de las escuelas institucionales el cumplimiento de las normas de dicho Estatuto. En ese contexto, todo aspirante a Oficial debe dar cumplimiento al Reglamento de Disciplina para los Cadetes de la Escuela de Aviación, aprobado mediante Resolución E N° 993, de diciembre de 2002, de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea. En este punto, enfatiza que de la sola lectura del citado manual, es posible advertir que las conductas susceptibles de ser sancionadas escapan de las que pudieran ser consideradas en otros regímenes educativos, pues los cadetes son seleccionados para recibir una formación militar profesional especializada, los que deben mantener estándares académicos y de comportamiento que implican exigencias formales mucho más elevadas que las que debe enfrentar un estudiante de régimen civil, y que bajo ese contexto, no es infrecuente que durante su proceso formativo reciban muchas sanciones correctivas.

En cuanto a los antecedentes internos del ex Cadete Elgueta, expone que desde el Tercer Año de Escuela -2011- comenzó a presentar problemas de disciplina siendo sancionado en diversas ocasiones, por mala presentación personal, llegar tarde a la cuenta matutina, no portar tarjeta interna de control, presentar el baño sucio, mala disciplina al hablar en la fila, faltar respeto cadete menos antigua, usar celular fuera de horario permitido, no realizar de buena forma su rol de encargado de sala, entre otras. Es bajo este contexto, que el día 9 de diciembre de 2011 mientras el ex Cadete rendía examen de Ingeniería del Avión T-35 fue acusado de copiar en la prueba situación que quedó anotada en su hoja de vida mediante sanción de 300 deméritos. Añade que antes de quedar a firme la sanción, el ex cadete dedujo recurso de reconsideración, el que fue rechazado. Luego el 15 de diciembre presento reclamación ante Director de la Escuela el que fue conocido y resuelto por el Consejo de Instrucción y Disciplina, el que dejó sin efecto la sanción y rebajó 30 deméritos de su hoja de anotaciones, finalizando el año 2011 con 480 deméritos.



Añade que en el período siguiente no existió persecución como lo acusa el demandante, recibiendo entre enero de 2012 y el 5 de marzo solo dos sanciones por estar durmiendo posterior al toque de la diana y por no recogerse a la escuela con la tenida adecuada, esta última sanción fue dejada posteriormente sin efecto en atención a solicitud de reconsideración del ex cadete.

Expone que con fecha 05 de marzo de 2012, mediante presentación dirigida al Coronel de Aviación Cristian Pizarro el ex cadete comunicó su decisión, en conjunto con sus padres, de solicitar su baja voluntaria.

A continuación, se refiere a la causa judicial que con fecha 1 de octubre de 2012 interpuso el ex cadete ante el Juzgado de Aviación de Santiago por el delito de maltrato de obra en contra de funcionarios de la Fuerza Aérea sancionados en los artículos 330 del Código de Justicia Militar y 255 del Código Penal, la que luego de instruirse el sumario por la Fiscalía de Aviación y no habiéndose acreditado los hechos denunciados se dictó sentencia de sobreseimiento.

Asimismo, señala que a propósito de la solicitud de baja presentada por el demandante, se instruyó una investigación sumaria administrativa tendiente a determinar y esclarecer la situación informada por el ex cadete, la que demostró que no existió acosa en contra de éste, ni de parte del Teniente Jarpa Candia, ni de ningún otro miembro de la Fuerza Aérea, y que las sanciones que recibió durante su proceso formativo en la Escuela de Aviación fueron el producto de su indisciplina y falta de compromiso con los deberes militares. De igual modo, una ampliación de dicha investigación determinó que el procedimiento ejecutado por el teniente Jarpa no fue el óptimo, ya que en definitiva no percibió por sus propios sentidos el incidente, sin embargo ello es una situación anexa tendiente a constatar la forma en que se determinó la conducta del copia en un examen, ya que es de interés de la institución que dichos procedimientos cumplan en lo formal con los estándares establecidos para cada proceso.

Finalmente, refiere que se logra concluir que la renuncia presentada por el ex cadete obedece única y exclusivamente a una decisión voluntaria a



consecuencia de su falta de vocación y adaptación a la vida militar, sin que exista responsabilidad alguna de parte de la Fuerza Aérea de Chile o de alguno de sus Oficiales.

En cuanto a los daños que se demanda, expone que monto solicitado por daño emergente es inverosímil pues no hay indicio alguno que dé cuenta de cómo la Fuerza Aérea pudo provocar un daño de esa magnitud. El lucro cesante es incierto y determinado, en tanto el daño moral resulta totalmente desproporcionado. De igual modo, alega que no proceden reajustes e intereses en la forma que han sido solicitados.

A fojas 63, el demandante evacuó la réplica, enfatizando en la conducta negligente y desidiosa de la parte demandada, pues desempeñó una conducta permanentemente ofensiva, humillante y arbitraria, que ocasionó a su representado un perjuicio irreparable, quien finalmente debió solicitar su baja voluntaria de la institución.

A fojas 65, la demandante evacuó la réplica, sin agregar nuevos antecedentes a los ya expuestos en la contestación de la demanda.-

A fojas 73, se llevó a efecto audiencia de conciliación, con la sola asistencia de la parte demandante, por lo que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo atendida la rebeldía del demandado.

A fojas 75, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sobre los que deberá recaer los siguientes: 1) Forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos que motivan la presente causa; 2) Existencia de daños sufridos por el demandante, atribuibles a los hechos anteriormente mencionados. En la eventualidad, naturaleza y evaluación de los mismos; y 3) Relación de causalidad existente entre los perjuicios sufridos por el actor y una acción u omisión dolosa o culpable del demandado.

A fojas 225, encontrándose la causa en estado, se citó a las partes a oír sentencia.

### **Considerando:**

#### **I. En cuanto a las tachas.**



**Primero:** Que, a fojas 100 y 103 la parte demandante opuso las tachas de los numerales 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, en contra de los testigos de la demandada, Aliro Borquez Barthou y Francisco Cáceres Vera, fundada en que ambos señalaron ser oficiales de la FACH, y por tanto, que al ser un funcionario público designado para declarar por el Fisco de Chile, no se encuentran hábiles para prestar declaración en este juicio.

**Segundo:** Que, la parte demandada evacuando los traslados conferidos señaló que los funcionarios públicos se encuentran sometidos a un estatuto jurídico en cuanto a la constatación, sanciones y permanencia en el cargo, de manera que no se encuentran sometidos a los presupuestos en que se fundan las tachas, pues es claro que no son dependientes, ni trabajadores, ni labradores de la parte que los presenta, descripciones propias de las relaciones laborales de derecho privado.

**Tercero:** Que, en cuanto a la tacha en estudio, cabe comentar que conforme lo dispone el artículo 89 del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de fecha 16 de Marzo de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido del Estatuto Administrativo, los funcionarios públicos gozan de una estabilidad distinta en el empleo a los trabajadores privados, que les asegura una independencia y seguridad en la continuidad de su carrera funcionaria, no existiendo una relación íntima entre su declaración y la relación laboral de quien lo presenta, razón por la cual el motivo subyacente que se infiere del numeral 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, cual es la aprensión del testigo trabajador dependiente de quien exige su declaración a perder el empleo, desagradar a su empleador o ver comprometido su futuro laboral, no concurre en la especie, por la particular relación que une a los testigos con la entidad fiscal, razón por la cual no cabe sino desestimar la tacha promovida, como se dirá.

## **II. En cuanto al fondo.**

**Cuarto:** Que, comparece en estos autos **Karla Andrea Rivillo Machuca**, en representación de **Diego Ignacio Elgueta Valenzuela**, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de**



**Chile**, representado por la Abogado Procurador Fiscal de Santiago, doña Irma Soto Rodríguez, o quien le subrogue legalmente, y solicita acogerla en todas sus partes, condenándolo a pagar en favor de su representado la suma de \$ 32.423.364 por daño emergente; \$ 100.000.000 por lucro cesante y \$ 100.000.000 por daño moral, o la suma que el tribunal estime fijar de acuerdo al mérito del proceso, más los intereses y reajustes que se devenguen desde la fecha de presentación de la demanda, con costas, fundándose para ello en los antecedentes de hecho y derecho ya reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

**Quinto:** La parte demandada, procedió a contestar la demanda interpuesta en su contra, solicitando su total rechazo, con costas, conforme las alegaciones y defensas que introdujo al debate en la etapa de discusión, las que ya fueron consignadas en la parte expositiva de este fallo.

**Sexto:** Que, atendido que en la presente litis se reclama la responsabilidad del Estado, se debe establecer el régimen jurídico que es aplicable. Al respecto, lo primero que se debe señalar es que la responsabilidad de los Órganos de la Administración del Estado no es objetiva, entendida ésta en el sentido doctrinario de la misma, es decir, aquella en la que sólo se requiere acreditar la existencia del daño y la relación de causalidad, prescindiéndose del actuar del órgano. En efecto, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, la responsabilidad del Estado tiene su fuente en la falta de servicio, factor de imputación introducido en nuestra legislación a través de la dictación de la Ley N° 18.575, Ley de Bases de la Administración del Estado promulgada el 5 de diciembre de 1986, que incorporó al Derecho Público chileno el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado elaborado por el derecho administrativo francés. Este cuerpo normativo, en el artículo 44 -hoy 42- prescribió que: “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”. Así, se ha definido la falta de servicio como un factor de imputación que supone la ocurrencia de un servicio tardío o defectuoso, que genere la consecuente responsabilidad indemnizatoria.



Una vez esclarecido lo anterior, cabe consignar que en la especie se demanda la responsabilidad del Estado por actos cometidos por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, debiendo precisarse que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile están excluidos de la aplicación del artículo 42 de la Ley N° 18.575, conforme lo establece expresamente el artículo 21 del referido cuerpo normativo. Sin embargo, esta exclusión no implica que aquellos no puedan ser responsables de los eventuales daños que el ejercicio de sus funciones provoque, sino que sólo significa que tal responsabilidad debe asilarse en las normas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil referente a los delitos y cuasidelitos, específicamente en el artículo 2314 que establece la responsabilidad por el hecho propio, en caso que se estime existe falta de servicio, y en los artículos 2320 y 2322 del mismo Código que establecen la responsabilidad por el hecho ajeno, si se trata de una falta personal del o de los funcionarios, tal como se realizaba antes de la dictación de la referida Ley N° 18.575.

**Séptimo:** Que, despejadas las ideas anteriores cabe analizar si la prueba rendida permite tener por establecidos los presupuestos fácticos esgrimidos por el actor y así determinar si en la especie aquellos pueden configurar la responsabilidad del demandado, la que como se señaló debe ser reconducida al artículo 2314 del Código Civil, puesto que en la especie no se está demandando la responsabilidad de un sujeto determinado, sino que la actuación de una serie de funcionarios que intervienen en los hechos, reclamándose así la responsabilidad del órgano.

**Octavo:** Que, con el objeto de acreditar sus pretensiones, el demandante allegó a los autos **prueba instrumental**, la que corresponde a: 1) Copia de certificado de notas de Diego Elgueta, emitido por el Coronel de Aviación Cristian Pizarro, Director de la Escuela de Aviación; 2) Copia de escrito de reconsideración a las sanciones aplicadas presentada por el Sr. Elgueta con fecha 12 de diciembre de 2011; 3) Copia de respuesta de reconsideración emitida por el Comandante del Grupo Escuela a Diego Elgueta de fecha 13 de diciembre de 2011; 4) Copia de Oficio de 29 de diciembre de 2011 enviado por el Coronel Pizarro al demandante; 5) Copia de informe de situación del Sr. Elgueta de fecha 15 de diciembre de 2011;



6) Copia de la declaración prestada por el Sr. Elgueta, el día 19 de abril de 2012, en el proceso sumarial llevado a efecto por la FACH; 7) Copia de Resolución Reservada FACH N° 196/2012 de 27 de agosto de 2012; 8) Copia de solicitud de reconsideración a sanción de Diego Elgueta, de 02 de marzo de 2012; 9) Copia email de cobranza enviado a don Félix Elgueta por la compañía HDI de 20 de septiembre de 2012; 10) Copia de Oficio N° 1756/12321 de 20 de agosto de 2012; 11) Copia de póliza de fianza 213033 tomada por el Sr. Elgueta a favor de la FACH; 12) Copia de contrato de caución tomado por el Sr. Elgueta en favor de FACH y de constitución de fianza por parte de Víctor Valenzuela Balladares y Cristina Valenzuela Balladares; 13) Copia de certificado de pago, finiquito y subrogación de derechos de fecha 14 de septiembre de 2012; 14) Copia de carta de compañía HDI Seguros S.A. en que se cobra la póliza de seguros en favor de la FACH; 15) Set de 15 comprobantes de depósitos efectuados en distintas épocas en cuenta 24713228 perteneciente a la FACH; 16) Copia de denuncia presentada ante la Fiscalía de Aviación de Santiago, de fecha 1 de octubre de 2012.- **Oficio:** Solicitó mediante presentación de 31 de agosto de 2016, se oficiara a la Fuerza Aérea de Chile, con el objeto que ésta remitiera hoja de vida de demandante y sumario administrativo iniciado por Resolución Reservada 72/2012. La requerida remitió la documental solicitada mediante Oficio N° 31004/22, agregado a fojas 194, la que se custodió bajo el N° 60-2017 en este tribunal. **Prueba Pericial:** Mediante presentación de 88, solicitó se designara perito psicólogo en estos autos, con la finalidad de determinar los daños ocasionados a Diego Elgueta por el trato recibido por los funcionarios de la FACH, diligencia a la que se accedió por resolución de 18 de agosto de 2016, designándose a fojas 198, a doña María Inés Schmidt Espina, la que lo evacuó a fojas 207 y siguientes.-

**Noveno:** La parte demandada con la finalidad de acreditar sus defensas, incorporó **prueba documental**, la que consiste en: 1) Copia simple de Oficio EA.DIR.DAE. N° 1/371/2011; 2) Copia autorizada de solicitud de baja voluntaria del ex cadete Elgueta Valenzuela, de 05 de marzo de 2012; 3) Acta N° 09/2012 del Consejo de Instrucción y Disciplina, de fecha 13 de marzo de 2012, de la Escuela de Aviación; 4)



Copia de Resolución N° E (P) 0753, de 06 de julio de 2012, del Comando de Personal; 5) Copia autorizada de antecedentes y registros de anotaciones de mérito y demérito del ex cadete Elgueta, de los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012; 6) Copia autorizada de recurso de reconsideración presentado por el Sr. Elgueta a la sanción de 300 deméritos; 7) Copia autorizada de respuesta del Comandante de Grupo Escuela a la solicitud antes mencionada; 8) Copia autorizada de presentación de 15 de diciembre de 2011, dirigida por el Sr. Elgueta al Director de la Escuela de Aviación; 9) Actas N° 37/2011, N° 39/2011 y N° 40/2011 del Consejo de Instrucción y Disciplina de la Escuela de Aviación, de fechas 01, 15 y 29 de diciembre de 2011, respectivamente; 10) Copia autorizada de Oficio EA.DIR.DAE. N° 1/419/2011, de fecha 29 de diciembre de 2011; 11) Resolución del Comando de Personal N° 3920/2012/16880, de fecha 03 de noviembre de 2012; 12) Copia de estampado de notificación por carta certificada de 3 de septiembre de 2012 de la Resolución Reservada N° EA (PER) 19/2012 de 27 de agosto de 2012, al Sr Elgueta Valenzuela; 13) Copia de investigación sumaria administrativa ordenada mediante Resolución Reservada N° EA (PER) 64, 2012, de la Dirección de la Escuela de Aviación, de 5 de marzo de 2012; 14) Copia simple de expediente de causa N° 50-2012/JR, del Juzgado de Aviación de Santiago. (Custodiados bajo el N° 6109-2016).

**Prueba testimonial:** consistente en las declaraciones de Aliro Antonio Borquez Barthou y Francisco David Cáceres Vera, quienes señalaron haber compartido en la Escuela de Aviación con el demandante y que bajo ese contexto es que conocen de los hechos sobre los que declaran. El testigo Borquez Barthou, sostuvo que al principio tuvo una relación de amistad con el actor, pero luego se fueron alejando debido a actitudes poco profesionales y fuera del marco de los estudios de parte de su parte. Agregó que cuando comenzaron el curso de vuelo, se inició el período de evaluación y que fue en ese momento que decidieron dar aviso en un examen que Diego se encontraba copiando, siendo sancionado con posterioridad. Expone además que fue sancionado reiteradamente por infringir el reglamento de régimen interno de los cadetes, ya que no cumplía horarios, era despreocupado de sus estudios. En tanto, el testigo Cáceres Vera, señaló que nunca tuvo relación de amistad con el demandante, solo se saludaban, y expone que él



se encontraba en la sala el día en que sorprendieron copiando al demandante. Añade que la prueba estaba a cargo del teniente Gabriel Candia. Asimismo narró una serie de conductas del demandante que iban contra las normas internas, tales como quedarse acostado luego del toque de la diana. Señala que a su parecer no existía persecución en contra de Diego, pues las veces que fue sancionado fue porque no cumplía el reglamento, “iba contra el sistema siempre”.

**Décimo:** Que, en este punto valga recordar que la demanda indemnizatoria se alza sobre la alegación de malos tratos que habría recibido el actor durante el tiempo en que tuvo la calidad de cadete de la escuela de aviación Capitán Ávalos, y en especial en los tratos que recibió del Teniente Gabriel Jarpa en el episodio ocurrido el día 09 de diciembre de 2011, en el marco de la rendición de una prueba de ingeniería, en la que fue acusado por éste de estar copiando, y los actos posteriores que llevaron a que se le aplicara una sanción de deméritos. Luego de ello, denuncia que al reintegrarse al año siguiente al período académico habría sido víctima de una persecución por parte de aquellos oficiales que lo sancionaron en el supuesto episodio de fraude, lo que desembocó en que solicitara su baja voluntaria de la Escuela.

**Undécimo:** Que, luego de analizadas las probanzas incorporadas al proceso, ya singularizadas en los motivos octavo y noveno, es posible concluir que el actor no ha logrado acreditar los hechos sobre los que erige su pretensión indemnizatoria, toda vez que no probó que haya sido víctima de los malos tratos que denuncia ni de la persecución por parte de sus superiores, pues la instrumental que acompañó más bien da cuenta que, si bien se le siguió un proceso sancionatorio por habersele imputado el copiar durante una prueba, lo cierto es que al interior de la institución éste tuvo las instancias para exponer su caso y solicitar reconsideración de la medida aplicada según da cuenta la instrumental acompañada por el propio actor. En efecto, adjuntó copia de la reconsideración a las sanciones que se le aplicaron y la respuesta dada a ella por el Comandante del grupo Escuela y Copia de oficio enviado por el Director de la Escuela de Aviación de fecha 29 de diciembre de 2011, todos antecedentes agregados a fojas 115 y



siguientes, y que no hacen sino reafirmar lo antes señalado, en cuanto a la sanción que se le aplicara por el episodio en que fue sorprendido copiando, y su sometimiento al procedimiento interno correspondiente, sin que de ello surja algún signo de malos tratos o de persecución en los términos que reclama. De igual modo, la Resolución Reservada N° EA (PER) 196/2012, que resuelve sobre la acusación efectuada por el Sr. Elgueta en contra de diversos Oficiales, concluye que *“las circunstancias acontecidas no se ajustan a las circunstancias acreditadas en la investigación, y por tanto no es la causal de su baja voluntaria, sino esta última obedecería a la desmotivación de su parte para seguir en la Escuela de Aviación, lo que se vio reflejado al cometer una mayor cantidad de faltas a la disciplina que fueron sancionadas y que le afectaron de mayor forma a su desempeño académico”*. Asimismo, la circunstancia que mediante Investigación Sumaria Administrativa, ordenada por Resolución (r) N° 64-2012 se haya sancionado al Tte. Gabriel Jarpa por haber mantenido una conducta poco prudente frente a la denuncia de que el actor estaba copiando, pues se encontraba distraído sin realizar el cuidado y supervisión de los alumnos que rendían el examen, no constituye por sí solo un acto que pueda calificarse de un mal trato de persecución, pues más allá que se distrajo y no detectó en forma personal el acto de copia, de igual modo éste luego resultó acreditado en el proceso investigativo. A su turno, los testigos de la parte demandada, estuvieron contestes en que el demandado mostró durante su paso por la Escuela de Aviación una actitud permanente de contravención a los Reglamentos que rigen la disciplina interna y que fue a propósito de ello que se le sancionó en innumerables oportunidades. En efecto el testigo Borquez Barthou señaló que el actor *“tenía una actitud que contravenía nuestro reglamento, no cumpliendo horarios, era despreocupado y lo más grave, es que no se preocupaba de sus estudios en forma profesional”*. En tanto, el testigo Cáceres Vera, quien compartió dormitorio con el actor luego de su reingreso a la Escuela, sostuvo que éste se quedaba acostaba luego del toque de la diana, lo que era contrario al reglamento y que esas actitudes perjudicaban al resto de sus compañeros, porque funcionaban en equipos.

**Duodécimo:** Que, valga señalar que no habiéndose acreditado los hechos sobre los cuales el actor hace descansar la acción de marras,



necesariamente ésta deberá ser desestimada, toda vez, que a la luz de los antecedentes acompañados y conclusiones antes expuestas, no se divisa un accionar culposo por parte de los agentes de la entidad denunciada, elemento determinante para el éxito de su pretensión. Consecuencialmente, no será necesario pronunciarse sobre los demás elementos de la responsabilidad extracontractual invocada ni sobre los perjuicios, por resultar ello inoficioso.

**Décimo tercero:** Que, las demás probanzas allegadas al juicio en nada modifican las conclusiones a que se ha arribado precedentemente, por lo que no se realizará su análisis pormenorizado, sin perjuicio de haberse tenido a la vista al momento de resolver.

**Décimo cuarto:** Que, no se condenará en costas al demandante por estimarse que éste ha tenido motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones, teniendo presente el mérito de autos, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698 y siguientes, 2314 y siguientes del Código Civil, artículos 144, 170, 254 y siguientes, del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

**I.- En cuanto a la tacha.**

Que, se rechazan las tachas en contra de los testigos Aliro Borquez Barthou y Francisco Cáceres Vera, sin costas.-

**II.- En cuanto al fondo:**

- (i) Que, se rechaza la demanda de fojas 1
- (ii) Que, no se condena en costas al demandante.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Rol C 8387-2015

Pronunciada por Nancy Torrealba Pérez, Juez Suplente del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.



Autoriza Ana María Parada Arroyo, Secretaria Subrogante del  
Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

En Santiago, a treinta de Noviembre de dos mil dieciocho , se notificó por  
el estado diario, la resolución precedente.

